

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA
Medellín, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

Radicación	05001-31-03-006-2023-00237-01
Proceso	Servidumbre eléctrica
Demandante	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandada	Catalina María Isaza Moreno y otros
Tema	Apelación auto que rechazó la demanda
Decisión	Revoca proveído
Rdo. interno	069-23
Providencia No.	152-23

I. ASUNTO A RESOLVER

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 22 de junio del año en curso por el Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

- Mediante la decisión recurrida, el *a quo* rechazó la demanda verbal de imposición de servidumbre eléctrica instaurada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en contra de Catalina María Diana María y Juan Miguel Isaza Moreno y el Banco Agrario de Colombia S.A., por no haber sido cumplidas cabalmente las exigencias realizadas en auto inadmisorio del libelo introductorio fechado cinco de junio de 2023.
- Frente a la decisión, la gestora judicial de la actora presentó escrito el 13 de junio de los corrientes, con los requisitos que consideró subsanatorios de la demanda conforme lo solicitado por el juzgado.
- El *a quo* rechazó el escrito inaugural, arguyendo que las exigencias

realizadas en el auto inadmisorio no habían sido cumplidas íntegramente por la parte demandante.

4. Estriba el apelante su recurso en contra de la decisión así proferida, de la siguiente manera:

4.1. En cuanto aportar el certificado de existencia y representación del Banco Agrario de Colombia S.A., indicó que en el escrito de subsanación presentado se había adecuado la demanda relacionando la identificación de los demandados por su nombre, identificación y nombre de sus representantes legales, y a su vez, aportó el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Advierte que, el artículo 85 del C. General del Proceso no exige o determina como debe denominarse el documento mediante el cual se pruebe la existencia y representación legal de las personas jurídicas, pues lo que se desprende del requisito es que se pruebe que la persona jurídica existe y quien la representa. Aunado a ello, la misma norma indica que en los casos en que las bases de datos de las entidades se pueda certificar su existencia y representación no debe aportarse al proceso dicha prueba.

Dijo que adicional a ello, el artículo 117 del C. de Comercio señala que para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara de Comercio respectiva, por lo que, con el escrito de subsanación cumplió con la carga de probar la existencia de la sociedad demandada.

4.2. En lo que tiene que ver con los hechos y las pretensiones, expuso que son completamente claros y precisos, dejando entrever el fin del proceso judicial, y en caso de considerarse lo contrario, el fallador debe interpretar el petitum y la causa petendi, para de allí extraer la verdadera intención de la demanda, puesto que el juez al interior del proceso no cumple una labor mecánica y como tal se encuentra obligado a interpretar la misma, con el fin de garantizar a la partes el acceso pleno y efectivo a la administración de justicia.

Indicó que en la subsanación de la demanda se señaló que las pretensiones relacionadas en el libelo cumplen con lo exigido en la norma procesal, además, con las pretensiones se busca que el juzgado al momento de dictar sentencia se pronuncie sobre cada una de ellas, razón por la cual no se clasificaron, pues las mismas conservan conexidad y no se excluyen entre sí.

Refirió que, el juzgado de primera instancia olvida que en el libelo introductor se relacionó de manera clara y precisa la información que se indicó en el escrito de subsanación, incluso ya se encontraba informado en el libelo demandatorio.

En relación con la determinación del bien inmueble objeto de servidumbre, la parte actora relacionó que dicha información había sido suministrada en la demanda, específicamente en la pretensión 1, adicionalmente en los hechos 3.1., 3.2. y 3.3., e inclusive se indicó que como este predio es rural no se identifica con nomenclatura.

En suma, que todas las aclaraciones solicitadas por el Juzgado de primer grado se encontraban debidamente descritas en el escrito de demanda, como lo es la servidumbre que se pretende legalizar con el proceso, las medidas de la servidumbre y si sobre el predio ya existía un trazado de una línea de conducción de energía eléctrica, y, las medidas de la servidumbre relacionada en la pretensión número dos y en la prueba uno.

En su sentir, el juzgado pretende exigir requisitos no regulados en la ley 56 de 1981 y Decreto 2580 de 1985, a pesar de que los jueces en su providencia están sometidas al imperio de la ley.

CONSIDERACIONES

1. En aras de encaminar en legal forma el curso de determinado proceso y evitar futuras nulidades el legislador le confirió al operador jurídico la facultad de exigir oficiosamente y desde los inicios de la misma, se subsanaran los defectos que esta presentara, para lo cual la inadmitiría, señalando los requisitos formales o los anexos de los que carezca.

El precepto 82 del Código General del Proceso, enuncia todos los aspectos que debe contener una demanda, indispensables para que se produzca una decisión de fondo, toda vez que le brinda al juez de conocimiento las bases sobre las cuales se adelantará determinado proceso y lo que se pretende con el mismo, además de garantizarle a la contraparte su derecho de defensa.

Con la misma finalidad, se estableció en el artículo 84 *ibidem*, los anexos que necesariamente deben acompañarse a ésta, para que desde los inicios del trámite respectivo se pruebe la existencia de los involucrados en el proceso, su

representación legal y judicial u otra circunstancia especial en determinada clase de procesos.

La falta de cualquiera de estos requisitos faculta al funcionario al que se le haya asignado determinado asunto, como regla general, a inadmitir la demanda y conceder a la parte demandante el término de cinco (5) días para que subsane los defectos de los cuales adolece la misma y que deben ser señalados en la misma providencia; y, excepcionalmente, esto es, cuando la ley expresamente así lo disponga, podrá rechazarla de plano.

Una vez cumplido el término sin que el demandante subsane los aspectos indicados por el Juez, éste podrá rechazarla, al tenor de lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso.

2. Caso concreto. Tal como se indicó en los antecedentes, la presente demanda fue rechazada por el a quo, al considerar que no se había cumplido íntegramente con los requisitos exigidos en auto inadmisorio, concretamente en allegar el certificado de existencia y representación del Banco Agrario de Colombia S.A. y el ajuste a los acápites de hechos y pretensiones, conforme lo establecen los numerales 4º y 5º del artículo 82 del C. General del Proceso.

Por tanto, examinará este Despacho la argumentación planteada por la parte recurrente, para determinar si era procedente el rechazo de la demanda por parte del *a quo*, por no haberse cumplido a cabalidad con las exigencias efectuadas en el auto inadmisorio.

2.1. Como primera medida, en lo que tiene que ver la aportación del certificado de existencia y representación del Banco Agrario de Colombia S.A., hay que significar que conforme al artículo 85 del C. General del Proceso, tal documento no puede exigirse por el juez, cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado cuya información *“conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla”*, mismo que enfatiza *“Cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno”*.

Para la Sala, si bien la aludida entidad financiera es una sociedad de economía mixta del orden nacional, la circunstancia de que la información de la representación legal conste en la base de datos de entidad públicas, como en este

caso Superintendencia Financiera de Colombia, conlleva a que el juzgado debió acudir a tales registros, para realizar las verificaciones del caso.

Frente a la razón de ser o fundamento de la mencionada normativa, indicó la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC4718-2017. MP. Ariel Salazar Ramírez:

“...Disposición, que se advierte atiende a los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones al interior del proceso, de acuerdo lo dispuesto por el artículo 103 de la norma adjetiva civil, así como la Ley 527 de 1999, que propenden porque en todas las actuaciones judiciales, se haga uso de las mismas...”.

“...”

Es así, que en el caso de las personas jurídicas controladas y vigiladas por las Superintendencias Financiera y la de Subsidio Familiar, así como el Ministerio del Interior, encargadas de expedir los certificados de existencia y representación de las empresas y entidades religiosas a su cargo de acuerdo al artículo 326 del estatuto Financiero y el la Ley 25 de 1981, como quiera que tales entidades cuentan con base de datos en los cuales se puede verificar la existencia y representación, así como del domicilio de éstas, según se puede verificar en las páginas web de cada una, los jueces y Magistrados, pueden consultarlas a fin de verificar el requisito referido en el artículo 85 del Código General del Proceso...”.

Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta que los despachos judiciales cuentan con las posibilidades de acudir a cualquiera de las entidades públicas o privadas encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, no resulta procedente la inadmisión automática por este requisito.

2.2. Ahora, en lo que tiene que ver con el ajuste a los acápites de hechos y pretensiones de la demanda, conforme lo establecen los numerales 4º y 5º del artículo 82 del C. General del Proceso, se evidencia por la Sala que lo pretendido se encuentra debidamente expresado y el fundamento fáctico está determinado, clasificado y enumerado, en los términos de la citada normativa.

En efecto, las aludidas complementaciones y precisiones que se exigen en forma general por parte del Juzgado, no tienen sustento legal, pues contrario a lo indicado por el *a quo*, no son hechos que deban ser incluidos o modificados en la demanda como fundamento de las pretensiones, ya que éstos si bien deben ser concretos, lo que se requiere es que le ofrezcan al juez de conocimiento una idea

general sobre las circunstancias que rodean el caso que se expone y que sirven de sustento a las pretensiones invocadas.

Las especificaciones que de los hechos requiera el juzgador para efectos de adoptar una decisión de fondo, como las relacionadas por el a quo en la inadmisión de la demanda, hacen parte de la etapa probatoria que debe surtirse dentro del proceso, momento en el cual el operador jurídico puede ejercer las facultades oficiosas que le otorga el legislador en esta materia.

Por tanto, si a pesar de haberse planteado en términos generales los hechos objeto de controversia, el funcionario judicial considera que existen circunstancias específicas que debe dilucidar, no es esta la oportunidad procesal, ni el medio para tal efecto y, por ende, no puede resguardarse en el numeral 4° del artículo 82 del Código General del Proceso, para exigir como requisito de admisibilidad dichas explicaciones, ampliaciones o adiciones.

2.3. Frente a las pretensiones, exige el numeral 4° del artículo 82 del Código General del Proceso, que la demanda contenga:

“Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.”

Lo anterior, por cuanto la concreción y exactitud del **petitum** de una demanda es fundamental en cualquier clase de proceso, por ser el marco dentro del cual el Juzgador debe moverse durante todo el curso del proceso y finalmente decidir.

Sin embargo, advierte esta Corporación que en el caso concreto existe claridad y precisión en las pretensiones relacionadas por la parte demandante, pues de las mismas puede colegirse lo que busca el mismo con esta demanda.

Ahora, de considerar la Juez de primer grado que existe falta de técnica en la formulación de dichas súplicas, deberá pronunciarse al respecto al momento de dictar sentencia, donde definirá si concede las mismas o no, ajustándolas a dicha técnica, e impartiendo las órdenes a que haya lugar; pues no es dable exigirlo como requisito para la admisión de la demanda.

En suma, al exigir los presupuestos antes reseñados para admitir el libelo introductorio, el juzgado de primer grado superó los límites que le fijara el artículo 90 del Código General del Proceso, que conciernen a la correspondencia entre los supuestos fácticos y las pretensiones formuladas, convirtiendo el auto inadmisorio

en un verdadero obstáculo para el acceso a la administración de justicia, por derivarse de valoraciones subjetivas del fallador de primera instancia.

En consecuencia, se REVOCARÁ el auto que rechazó la demanda, emitido el 22 de junio de 2023, por el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y en su lugar, se dispondrá que el *a quo* la admita.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

RESUELVE:

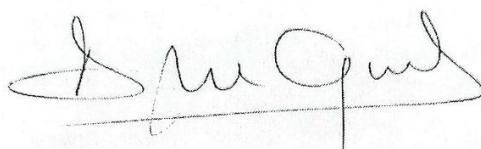
PRIMERO. REVOCAR el auto proferido el 22 de junio de 2023 por el Juez Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el cual rechazó la demanda verbal de SERVIDUMBRE formulada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en contra de Catalina María Diana María y Juan Miguel Isaza Moreno y el Banco Agrario de Colombia S.A.

SEGUNDO. En su lugar, se dispone que el juez de primera instancia proceda a admitir la demanda, por haberse cumplido con los requisitos exigidos, conforme lo explicado anteriormente.

TERCERO. No hay lugar a condenar en costas.

CUARTO. En firme lo aquí resuelto, vuelvan las diligencias al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022